

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	: FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ NARANJO
DEMANDADO	: COLPENSIONES.
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-015-2022-00448-01
RADICADO INTERNO	: 318-23
DECISIÓN	: MODIFICA PARCIALMENTE Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 358

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación y el grado de consulta a favor de Colpensiones, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se CONDENE a Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez con el 78.5% del IBL; se condene a reconocer y pagar la diferencia adeudada por el mayor valor de la mesada pensional; al pago de los intereses moratorios o en subsidio al pago de la indexación del valor de las condenas al momento del pago; y de las costas procesales.

Como supuestos facticos manifestó que en resolución SUB-4447 del 7 de enero de 2022 le fue reconocida la pensión de vejez al demandante Francisco Javier Rodríguez Naranjo, con fecha de causación el 5 de noviembre de 2021 y fecha de disfrute el 1º de diciembre de 2021; para la liquidación de la pensión de vejez se tuvo en cuenta 2.098 semanas, un IBL de \$17.981.721, un monto del 70.60% y una mesada pensional de \$12.695.095.

Asegura que el actor tiene 798 semanas adicionales a las 1300 semanas requeridas; por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.300 semanas

se causa el beneficio de aumentar 1.5% del monto, lo que genera un porcentaje adicional de 22.5%, que sumados con el 56% que reporta la fórmula, genera una tasa del 78.5%, que al aplicarla al IBL de \$17.981.721, proyecta una pensión de \$14.115.650 para el mes de diciembre de 2021.

El 28 de junio de 2022, el demandante solicitó a Colpensiones la reliquidación del monto de la pensión de vejez y el pago del retroactivo pensional, sin que haya obtenido respuesta.

RESPUESTA A LA DEMANDA

La entidad accionada al dar respuesta dijo que no le consta que el demandante tenga semanas adicionales a las 1.300. Considera que las afirmaciones relacionadas al 1.5% como beneficio por tener más de 1300 semanas y lo relacionado al cálculo del monto y la mesada pensional, no son hechos. Aceptó los demás hechos de la demanda. Se opuso a la totalidad de las pretensiones porque Colpensiones realizó la debida liquidación y para obtener el IBL de la prestación, se dio aplicación a lo establecido en el art. 21 de la Ley 100 de 1993. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reliquidar pensión de vejez, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, prescripción, imposibilidad de condena en costas, buena fe de Colpensiones, compensación, la genérica.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 4 de octubre de 2023, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la reliquidación de su pensión de vejez a cargo Colpensiones, con una tasa de reemplazo del 78.1%.

CONDENÓ a Colpensiones a pagar al demandante la suma de \$36.885.310 por concepto de retroactivo por reajuste de mesadas pensionales entre el 5 de noviembre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2023; condenó a Colpensiones, que a partir del 1° de octubre de 2023, siga reconociendo al demandante una mesada pensional \$16.779.068, sin perjuicio de los aumentos legales de cada año y las mesadas adicional de diciembre que a futuro se sigan causando. AUTORIZÓ a Colpensiones a realizar los respectivos descuentos con destino al sistema de salud del retroactivo ordenado. Condenó en costas a Colpensiones.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte demandante solicitando el reconocimiento de los intereses moratorios, al considerar que en sentencia SL 3130 de 2020 modificó la jurisprudencia que tenía frente al art. 141 de la Ley 1993 y la providencia en mención plantea los razonamientos en cuanto a la teoría de las obligaciones frente al pago, y por qué proceden en la reliquidación de la pensión.

El apoderado de Colpensiones, solicita la revocatoria de la sentencia, al expresar que en resolución SUB-4447 de 2022, su representada reconoció la pensión de vejez a partir del 1º de diciembre de 2021 en base a 2.098 semanas; retoma lo que dice el art. 34 de la Ley 100 de 1993, relativo al incremento del porcentaje a partir del año 2005, cuando se tiene más de las 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas. Que, al hacer las operaciones aritméticas, se le suman a 55.60% el 15% adicional, genera un porcentaje del 70.60% y no como lo indica la sentencia de primera instancia.

Considera que en este evento existe falta para pedir, en tanto, ya se estudió la solicitud en la resolución 4447 de 2022 y se expuso los fundamentos fácticos y jurídicos; y Colpensiones actúa conforme el principio de buena fe, sus actos están regidos por la presunción de legalidad.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte demandante, solicita que sea confirmada la sentencia que ordenó la reliquidación del monto de la pensión de vejez, asignándole un monto mayor y que condenó al pago del retroactivo, con fundamento en la sentencia SL 3501 de 2022 y las sentencias del Tribunal Superior de Medellín. Pero respecto a los intereses moratorios por la reliquidación de una pensión, reitera la solicitud elevada en el recurso de apelación, de reconocimiento de los intereses moratorios con base en la sentencia SL 3130 de 2020.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar, en virtud del recurso de apelación: i) Si hay lugar al reajuste pensional reconocido en primera instancia; ii) Si el demandante tiene derecho a los intereses moratorios.

En el grado jurisdiccional de consulta, se deberá analizar si hay lugar al reconocimiento del retroactivo reconocido en primera instancia, al pago de la indexación y las costas procesales.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que el Sr. Francisco Javier Rodríguez Naranjo solicitó la pensión de vejez el 18 de noviembre de 2022 y en resolución 4.447 del 7 de enero de 2022 le fue reconocida la prestación económica en aplicación del art. 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 9º de la Ley 797 de 2002, desde el 1º de diciembre de 2021, y se tuvo en cuenta para su liquidación un total de 2.098 semanas, un IBL de \$17.981.721 y una tasa de remplazo del 70,60% que generó una mesada pensional de \$12.695.095 (fls. 12 a 20 del expediente digital 01); el actor solicitó reliquidación del monto de la pensión de vejez el 28 de junio de 2022, exponiendo que tenía derecho a un monto del 78.5% por tener 798 semanas adicionales a las 1.300 semanas y ello generaba una mesada de \$14.115.650 (fl. 27 y 28).

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la liquidación de la pensión de vejez.

Pretende la parte demandante el reajuste de la pensión de vejez aplicando al IBL reconocido por Colpensiones en la resolución 4.447 del 7 de enero de 2022 de \$17.981.721, pero aplicando una tasa de reemplazo del 78,5% conforme lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 100 de 1993 por haber cotizado un total de 2.098 semanas.

Respecto al tema objeto de estudio establece el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 lo siguiente:

“ARTÍCULO 34. MONTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.

El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.

A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:

El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

$r = 65.50 - 0.50 s$, donde:

r = porcentaje del ingreso de liquidación.

s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje **se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima**” (Resalto fuera del texto)

Para el caso bajo estudio, no hay duda alguna que la prestación reconocida fue liquidada conforme lo estable el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, el cual señala que la tasa de reemplazo corresponde a aplicar la formula $R=65.5-0.5 (s)$.

Ahora, para un mayor análisis, debe explicarse cómo se despeja la fórmula planteada, debiéndose entender que “s” es el número de salario mínimos para el año 2021 (\$908.526) que caben en el IBL \$17.981.721, lo cual arroja un resultado de 19,7, que en principio da una tasa de reemplazo del **55.65%** conforme se desprende de la siguiente operación:

$$R=65.5 - 0.50 (\$17.981.721/\$908.526)$$

$$R= 65.5 - (0.5 * 19,7)$$

$$R= 65.5 - 9.85$$

$$R= \mathbf{55.65\%}$$

En orden de lo anterior la norma en comento dispone, que *“A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho*

ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.”

Teniendo en cuenta lo anterior, la norma da posibilidad de incrementar ese porcentaje, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas en un 1.5%.

Así pues, en el presente caso, para el año 2021 como fecha de causación de la pensión, las semanas mínimas requeridas eran 1.300, y el demandante cotizó un total de 2.098 semanas, lo que equivalen a **798 semanas adicionales**; y si dividimos las 798 semanas adicionales entre 50, dan un total de 15¹, que multiplicado por 1.5% arroja un **22.5%**.

En este sentido, al igual que lo señaló el juez del conocimiento, se puede decir que la tasa de reemplazo sería el resultado de la sumatoria: del **55,65%** (resultado que nos dio la fórmula) + **22.5%** (resultado de las semanas adicionales), que arroja un porcentaje final del **78.1%**.

Es necesario advertir, que esta Sala del Tribunal era del criterio que cuando se superen las 500 semanas adicionales a las 1.300, es decir, cuando el afiliado cotizaba más de 1.800 semanas, el tope de semanas adicionales que se podía adoptar, no podría superar el **15%**, al señalarse que este valor se extrae de la diferencia que existen entre los montos que trae el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, ello es, diferencia entre del **65%** al **80%**; no obstante, después de un análisis del estudio de la norma, se recoge tal postura, basándose en los argumentos que a continuación se exponen, y compartiendo lo señalado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 3501 de 2022.

Y es que, no puede perderse de vista que el artículo 10° de la Ley 797 de 2003, el cual modificó el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, como límite máximo para la tasa de reemplazo solo impuso el 80 %, “*sin indicar rango alguno de oscilación*”; nótese además que el aparte de dicha norma, que refiere a “*...en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo ...*”, alude a que entre mayor sea el ingreso base de liquidación –IBL-, menor será la tasa de

¹ Esta cifra debe arrojar un número entero, ya que solo se deben tener en cuenta el grupo de 50 semanas adicionales a las mínimas sin proporción alguna.

reemplazo. Ello obedece a la fórmula $R=65.5-0.5(s)$, donde se observa que entre más alto sea el IBL, el valor a restar de la fórmula será más elevado, generando como consecuencia una tasa más baja; no obstante, pretender, además de lo ilustrado, que también se deba limitar la tasa de reemplazo en un máximo de 15 %, se tornaría en una decisión que castigue “...dos veces el monto de la pensión, lo cual no tiene justificación alguna...”

Pretender entonces limitar la tasa de reemplazo en un máximo de 15 % haría ver que el límite máximo del 80 % de que trata la norma en comento, no tenga utilidad alguna. Ello se debe a que la única persona que aparentemente se vería beneficiada de tal porcentaje sería aquella que cuente con un IBL del salario mínimo legal mensual; sin embargo, atendiendo a lo regulado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, la pensión no se otorgaría con una tasa del 80 %, sino que se reajustaría al mínimo legal.

Asimismo, en la citada sentencia SL 3501 de 2022, frente al límite de la tasa de reemplazo de que trata el artículo 10° de la Ley 797 de 2003, señaló:

“Así mismo, la norma también contempla un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% del ingreso base de liquidación, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula indicada, sin embargo, la parte final del mencionado artículo 34 de forma expresa enfatiza en que, “El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación”, pero en este caso, sin indicar rango alguno de oscilación.

Ahora bien, para la Corte lo lógico es, como lo señaló el legislador, calcular el monto inicial de la pensión conforme a la tasa de reemplazo variable en función del nivel de ingresos de cotización, de suerte que, el monto máximo es directamente proporcional al número de cotizaciones adicionales a las mínimas requeridas, es decir, la tasa de reemplazo pende del nivel de ingresos del afiliado y del monto máximo del número de semanas cotizadas; no obstante, las cotizaciones efectuadas a partir del porcentaje máximo del 80% no se computan, ni procede su devolución, en virtud del principio de solidaridad, expresado en ese tope porcentual sobre el límite de salarios mínimos a los que puede llegar el monto de la prestación pensional otorgada por el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, con las reformas y adiciones legales ya enunciadas.

En efecto, la fórmula decreciente estableció que para determinar la tasa de reemplazo se resta a 65.50 los salarios mínimos contenidos en el IBL en cada caso, por tanto, si se vuelve a utilizar ésta para calcular el monto máximo de la pensión, se estaría tomando el nivel de ingresos de cotización para disminuir o castigar dos veces el monto de la pensión, lo cual no tiene justificación alguna, pues con la fórmula se pretende desincentivar el aumento injustificado del ingreso base de cotización, pero en manera alguna limitar el número de semanas necesario para alcanzar el monto máximo de la pensión

establecido por la misma norma, salvo la del tope legal ahora vigente de 25 SMMLV.

(...)

Por otro lado, nótese que el incremento de la tasa de reemplazo en un 1.5% del ingreso base de liquidación, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, corresponde a una forma de estimular el trabajo productivo, como valor fundante del Estado Social de Derecho, dado que el trabajo “es ciertamente un derecho humano (Artículo 25) pero también constituye, al mismo nivel del respeto o la dignidad humana, un principio o elemento fundamental del nuevo orden estatal. Cuando el Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente de la construcción de la nueva legalidad” (CC C-542-1992).

(...)

Ahora, desde la perspectiva de la regulación de la pensión de vejez, la concepción de la idea se basa en que el monto máximo porcentual de la prestación puede ser limitado en un régimen de aseguramiento social, como lo es el contemplado por el Título II, Capítulo I, de la Ley 100 de 1993, definido como un régimen solidario de prestación definida, en el cual los afiliados de mayores ingresos se solidarizan con aquellos de ingresos menores, a través de las aportaciones que realizan en un fondo común de naturaleza pública para garantizar el pago de las pensiones, señalando los montos mínimos y máximos para su reconocimiento, para lo cual el legislador estableció varios mecanismos con la finalidad de evitar pensiones excesivas que puedan poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema y, de esta manera, contribuir a la búsqueda de la realización de la solidaridad como principio fundamental de la seguridad social contenido en el artículo 48 Constitución Política que, a su vez, fue desarrollado por el literal c) del artículo 2 de la Ley 100 de 1993, al definirlo como: “la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil.

(...)

Lo anterior denota la voluntad del legislador por imponer una mayor base de cotización para los ingresos más altos, pero restringiendo el límite máximo de la pensión a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes con el fin de evitar desigualdades e inequidades en el reconocimiento de las pensiones que, a su vez, puedan afectar la viabilidad del sistema.

Como quedó visto, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, adoptaron unas reglas con el propósito de evitar distorsiones en el monto de las pensiones que reconoce el régimen de prima media con prestación definida, así: i) una tasa de reemplazo para la pensión de vejez calculada con una fórmula decreciente en función del nivel de ingresos de cotización; ii) un incremento del monto de la pensión en función del número de semanas cotizadas, adicionales a las mínimas requeridas; iii) un monto máximo de la pensión de vejez, que no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación; iv) un límite a la base de

cotización de 25 salarios mínimos legales, sin perjuicio del aumento hasta de 45 smlmv; y v) la prohibición de pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

De acuerdo a lo anterior, no existe duda alguna que el actor puede entrar a disfrutar de una tasa de reemplazo, pero del **78.1 %**, y no del **70.60%** como determinó en la resolución 4.447 del 7 de enero de 2022. Lo que implica que la mesada pensional para el 2021 sea la suma de \$14.043.724 (\$17.981.721*78,1%) y no de \$12.695.095 como se indicó en la resolución emitida por Colpensiones.

En relación con el retroactivo pensional causado por reajuste pensional, se encuentra que en primera instancia se condenó a Colpensiones a pagar al demandante la suma de \$36.885.310 causado del **5 de noviembre de 2021** hasta el 30 de septiembre de 2023. Valor que será MODIFICADO, teniendo en cuenta que de la resolución 4.447 del 7 de enero de 2022 se extrae que la causación del derecho del Sr. Francisco Javier Rodríguez Naranjo tuvo lugar el **5 de noviembre de 2021** pero el disfrute de la prestación económica de vejez solo tuvo lugar a partir del **1º de diciembre de 2021**.

En consecuencia, con lo anterior, al efectuar la liquidación del retroactivo por reajuste pensional a partir del disfrute 1º de diciembre de 2021 al 30 de septiembre de 2023 (fecha final tomada de la liquidación de primera instancia), generaba una retroactivo de \$35.716.798 y no la suma de \$36.885.310, conforme reposa en la table que se anexa:

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2021	5,62%	\$ 12.695.095	\$ 14.043.724	\$ 1.348.629	2	\$ 2.697.258
2022	13,12%	\$ 13.408.559	\$ 14.832.981	\$ 1.424.422	13	\$ 18.517.485
2023		\$ 15.167.762	\$ 16.779.068	\$ 1.611.306	9	\$ 14.501.755
					TOTAL	\$ 35.716.498

Suma que al ser actualizada la liquidación del 1º de diciembre de 2021 al 31 de octubre de 2022, genera que se CONDENE a Colpensiones a reconocer y pagar al Sr. Francisco Javier Rodríguez Naranjo la suma de \$37.327.804 conforme reposa en la tabla que se anexa:

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2021	5,62%	\$ 12.695.095	\$ 14.043.724	\$ 1.348.629	2	\$ 2.697.258
2022	13,12%	\$ 13.408.559	\$ 14.832.981	\$ 1.424.422	13	\$ 18.517.485
2023		\$ 15.167.762	\$ 16.779.068	\$ 1.611.306	10	\$ 16.113.061
					TOTAL	\$ 37.327.804

Y en este evento no operó el fenómeno de la prescripción, dado que la causación de la pensión tuvo lugar en noviembre de 2021, el reconocimiento de la pensión se dio por medio de la resolución 4.447 del 7 de enero de 2022, la reclamación de reajuste pensional fue elevada el 28 de junio de 2022 y la demanda se radicó el 5 de octubre de 2022. Sin que sobrepasara los 3 años a los que hace referencia los arts. 488 del CST y 151 del CPT y SS.

2. De los intereses moratorios y de la indexación de la condena

En cuanto a los intereses moratorios, tenemos que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 al regular la aplicación de los intereses moratorios, indica:

*“INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, **en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales** de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”* (Negrillas fuera del texto).

Partiendo de lo anterior debe advertirse que esta Sala era de la posición que los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 no eran procedentes cuando de reliquidaciones o reajustes se trata sino solo cuando se presentaba mora en el pago total de las mesadas pensionales, sin embargo dicha posición ha sido replanteada en aplicación de la sentencia SL 3130 de 2020 y acogiendo los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en sentencia SU 063 de 2023 donde se deja claro que dichos intereses son procedentes para reajustes o reliquidaciones pensionales.

No obstante, lo anterior también debe tenerse en cuenta que la imposición de dichos intereses no procede de forma automática y en algunos casos tal y como lo ha reconocido la Sala de Casación Laboral, se presentan ciertas circunstancias en las cuales el incumplimiento del plazo legal para dar respuesta no da lugar al cobro de los intereses moratorios, tales como:

- (i) *“Si las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer la pensión tienen justificación porque encuentran respaldo normativo, por ejemplo, cuando al momento de la solicitud de la prestación a la entidad administradora no se cumple con los requisitos para acceder a ella, pero aquellos son satisfechos en el transcurso del proceso judicial;*
- (ii) *Cuando se presenta suspensión del trámite por controversia entre los beneficiarios de la prestación en los casos de pensión de sobreviviente;*
- (iii) ***Cuando se presenta un cambio jurisprudencial entre el momento de la decisión administrativa y en el que se adopta la decisión judicial;***

- (iv) *Cuando se reconoce por inaplicación del principio de fidelidad y*
- (v) *El reconocimiento del derecho se da con venero en una acción de tutela que emana en virtud de una interpretación del principio de la condición más beneficiosa, por vía jurisprudencial, que difiere de la línea de pensamiento de esta Sala”. También se consideraba una de tales circunstancias los casos de reliquidaciones y reajustes; sin embargo, en ello consistió el cambio de jurisprudencia que se cuestiona en sede de tutela” (Resalto fuera del texto)*

Partiendo de lo anterior, considera la Sala que si bien en reajustes o reliquidaciones es posible aplicar la sanción moratoria del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para el caso bajo estudio no habría lugar a imponer dicha sanción en la medida que el reajuste pretendido se concede con fundamento en el **cambio jurisprudencial** y en la interpretación que de ello se ha hecho respecto a la forma de aplicar la liquidaciones pensional en los términos del artículo 34 de la ley 100 de 1993 y la formula decreciente en el contenido cuando se superan las semanas mínimas exigidas por la ley y se tiene derecho al porcentaje por semanas adicionales, tanto es así que anteriormente esta Sala era de la posición de negar esta clase de reajustes.

Por lo anterior lo legal y pertinente será CONFIRMAR la absolución de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y se CONFIRMARÁ a la condena impuesta a Colpensiones de reconocer y pagar la indexación de las sumas reconocidas en la sentencia objeto de reajuste pensional desde la fecha en que se hicieron exigibles (1º de diciembre de 2021) hasta el momento en que se realice el pago total de la obligación.

3. Frente a las costas procesales a cargo de Colpensiones

Se confirmará la condena en costas, dando aplicación al art. 365 del CGP que expresa: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...”, y en este evento, las pretensiones de reajuste de la tasa de reemplazo, retroactivo por reajuste pensional e indexación, fueron reconocidas a la parte accionante.

Sin costas en esta instancia por no prosperar los recursos de apelación presentados por las partes.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de **CONDENAR** a Colpensiones a reconocer y pagar al Sr. Francisco Javier Rodríguez Naranjo la suma de \$37.327.804 por concepto de retroactivo por reajuste pensional causado del disfrute 1º de diciembre de 2021 al 31 de octubre de 2023, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia de primera instancia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ NARANJO
DEMANDADO	: COLPENSIONES.
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-015-2022-00448-01
RADICADO INTERNO	: 318-23
DECISIÓN	: MODIFICA PARCIALMENTE Y CONFIRMA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 14 de diciembre de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 14 de diciembre de 2023 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO